impugna el recurrente, sino á la existencia de una obligación civil exigible.

Considerando que la afirmación que se hace en el tercer motivo del recurso está en abierta contradicción con los hechos que la Sala declara probados, cual es haber convenido Frontera en fletar la goleta "Concepción," y quedar por tanto obligado á cumplir ese convenio, cuya existencia declara el Tribunal sentenciador, y que es cosa distinta del contrato de fletamento, en cuya inexistencia funda el recurrente las infracciones que alega.

Fallamos que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de casación por infracción de ley interpuesto por Don Damian Frontera, al que condenamos en las costas; y devuélvase los autos al Tribunal del Distrito de San Juan, con la certificación correspondiente.

Así por esta nuestra sentencia que se publicará en la "Gaceta", lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—José O. Hernandez.—El Juez Asociado Don Rafael Nieto Abeillé votó en Sala.—José O. Hernandez.—Manuel F. Rossy.—Juan de Guzman Benitez.—Juan Morera Martinez.—Publicación. Leída y publicada fué la anterior sentencia por el Sr. Juez Asociado suplente del Tribunal Supremo Don Juan de Guzman Benitez, celebrando audiencia pública dicho Tribunal en el día de hoy, de que como Secretario certifico, en

Puerto-Rico á 31 de Diciembre de 1900.—E. de J. López Gastambide, Secretario.

SENTENCIA.—En la Ciudad de San Juan de Puerto-Rico á dos de Abril de mil novecientos uno, en el recurso de casación por infracción de Ley que ante Nos pende, interpuesto por la representación de los procesados Juan Bautista Rodriguez, Hermenegildo Torres, Fernando Smith y Dolores Santiago, contra sentencia del Tribunal del Distrito de Ponce, en causa seguida contra los mismos, en unión de otros, por robo con violencia é intimidación en las personas.

Resultando que la referida sentencia, dictada en veinte y uno de Abril del año próximo pasado, contiene el siguiente:

"Resultando probado que en la tarde del seis de Agosto de mil ochocientos noventa y ocho, varios individuos armados de fusiles y machetes, entre los que figuraban Hermenegildo Torres, Fernando Smith, Dolores Santiago (a) Pecoso, y Juan Bautista Rodriguez, se presentaron en el establecimiento mercantil de Don Juan Pons, contiguo á la casa de vivienda, y amarrando á dos de sus dependientes, trás varios disparos consecutivos y apuntando al pecho de los moradores con los fusiles que portaban, todo lo que era manifiestamente innecesario para la consumación del delito, se apoderaron de los comestibles y demás existencias, que no se recuperaron, cuyo valor se aprecia pericialmente en tres mil ochocientos cincuenta y cinco pesetas."

Resultando que el Tribunal del Distrito de Ponce, calificando estos hechos como constitutivos de un delito de robo con violencia é intimidación en las personas, previsto y penado en el número 4º del artículo 521 del Código penal, y á los procesados Juan Bautista Rodriguez, Hermenegildo Torres, Dolores Santiago (a) Pecoso y Fernando Smith, como autores por participación directa del expresado delito, con la agravante de haberse ejecutado el hecho en cuadrilla, y apreciando además en Smith la otra agravante de reincidencia, condenó á los tres primeros á la pena de doce años y un día de cadena temporal, y á Fernando Smith á catorce años y ocho meses de la misma pena, y á todos en las accesorias de interdicción civil durante la condena, inhabilitación absoluta perpétua, y sujeción á la vigilancia de la autoridad por todas sus vidas, á indemnizar mancomunada y solidariamente á Don Juan Pons de la cantidad de tres mil ochocientos cincuenta y cinco pesetas, y en las costas.

Resultando que contra esta sentencia se interpuso por la representación de los procesados recurso de casación por quebrantamiento de forma y simultáneamente por infracción de ley, y sustanciado y declarado sin lugar el primero, se entregaron los autos á los abogados defensores de los procesados para formalizar el de infracción de ley, habiéndolo verificado el de los procesados Juan Bautista Rodriguez y Hermenegildo Torres, fundándolo en los casos 3º y 5º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y citando como infringidos el artículo 521 del Código Penal, en su caso 4º, por aplicación indebida, y el caso 5º del mismo artículo, por su no aplicación, así como la circunstancia 16 del artículo 10 del mismo Código; el primero, porque las violencias é intimidación ejercidas en el acto del robo, no revestían un carácter de gravedad manifiestamente innecesaria para su ejecución, por lo que se había cometido manifiesto error en la aplicación del caso 4º, en vez del 5º del artículo 521 del Código penal; y el segundo, ó sea, la circunstancia 16 del artículo 10 del propio Código, por haberse apreciado como agravante la cuadrilla, que cuando no va acompañada del despojado como sucede en el caso de autos, no puede apreciarse como agravante genérica.

Resultando que la defensa de los otros procesados, Fernando Smith y Dolores Santiago, fundó también el recurso en los casos 3º y 5º del artículo 849 de la ley de Enjuiciamiento Criminal, citando como infringidos los mismos artículos del Código, y en el propio concepto que lo habían sido por la defensa de los otros dos procesados, y agregando, además, que no estando

determinado en los hechos probados á quien pertenecían los efectos que se decían robados, no podían calificarse como constitutivos de un delito de robo, infringiéndose así el artículo 520 del Código penal, y citando además como infringida, respecto del procesado Fernando Smith, la circunstancia 19 del artículo 10 del propio Código, puesto que se apreciaba en su perjuicio la agravante de reincidencia, cuando de los hechos probados no resultaban los antecedentes constitutivos de la expresada circunstancia.

Resultando que pasados los autos al Ministerio Fiscal, se adhirió al recurso interpuesto por la defensa de Fernando Smith y Dolores Santiago, reproduciendo los fundamentos del mismo, á excepción del primero, y que celebrada la vista con asistencia de los Abogados defensores de los procesados y del Fiscal, cada uno sostuvo sus respectivas conclusiones.

Vista siendo Ponente el Presidente del Tribunal Don José S. Quiñones.

Considerando que no es de apreciarse el primer motivo en que se funda el recurso interpuesto, por la defensa de los procesados Fernando Smith y Dolores Santiago, toda vez que al consignarse en los hechos declarados probados que los malhechores asaltaron el establecimiento mercantil de Don Juan Pons y se apoderaron de los comestibles y demás existencias que no se recuperaron, cuyo valor se aprecia pericialmente en la suma de tres mil ochocientos cincuenta y cinco pesetas, se deduce lógicamente y racionalmente que dichos efectos eran los del establecimiento mercantil de la propiedad de Don Juan Pons, y por consiguiente al calificar esos hechos como constitutivos de un delito de robo, no se ha infringido el artículo 520 del Código penal, en el concepto que expresa la representación de los recurrentes.

Considerando que para calificar el delito de robo como comprendido en el caso 4º del artículo 521 del Código penal, es indispensable que las violencias ó intimidación empleadas por los culpables, revistan una gravedad manifiestamente innecesaria para la ejecución del delito, circunstancia que no concurre en el caso presente, en que, según se consigna en los hechos que se declaran probados, los procesados se limitaron á amarrar á dos de los dependientes, disparar algunos tiros, pero sin causar daño á nadie, y apuntar con las armas al pecho de los moradores del establecimiento, sin determinar quiénes fueran, actos todos de intimidación y de violencia, constitutivos del delito que se proponían perpetrar, más ó menos necesarios para asegurar su ejecución, pero que no revestían carácter de gravedad innecesaria para la realización de sus criminales propósitos; por lo que, al calificarlos el Tribunal sentenciador como comprendidos en el número 4º del artículo 521 del Código penal ha incurrido en el error de derecho á que se refiere el número 3º del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y cometido las infracciones que se citan como fundamentos del recurso.

Considerando que no es de apreciarse en el presente caso como agravante la circunstancia de haberse ejecutado el hecho en cuadrilla, pues, como lo ha declarado ya este Tribunal Supremo en otras sentencias, esa circunstancia por sí sola no constituye una agravante genérica, si no vá unida á la del despojado, lo que no ha sucedido en el presente caso; y que no habiéndose consignado en los hechos que la sentencia declara probados, los elementos constitutivos de la reincidencia, como la define el artículo 10 del Código penal, al ocuparse de esa circunstancia no cabe apreciar tampoco esa agravante en perjuicio del procesado Smith, por más que en el encabezamiento de la sentencia se consigne que ha sido condenado anteriormente por el delito de robo, pues esta circunstancia, como todas las modificativas de la responsabilidad criminal, deben consignarse entre los hechos que se declaran probados, para que puedan ser apreciadas debidamente en la sentencia, por lo que también ha incurrido el Tribunal sentenciador en el error de derecho á que se refiere el caso 5º del artículo 849 de la ley de Enjuiciamiento Criminal, y cometido las infracciones legales que se citan como fundamentos del recurso.

Fallamos que debemos declarar y declaramos con lugar los recursos de casación, por infracción de ley, interpuestos por la representación de los procesados Juan Bautista Rodriguez, Hermenegildo Torres, Fernando Smith y Dolores Santiago, contra la referida sentencia del Tribunal del Distrito de Ponce por los motivos expresados á excepción del primero de los alegados por la representación de los dos últimos, y con lugar también el de adhesión interpuesto por el Ministerio Fiscal; y en su consecuencia casamos y anulamos la expresada sentencia en los extremos á que se refieren los indicados motivos, con las costas de oficio; lo que con la sentencia que á continuación se dicte, se comunique al Tribunal del Distrito de Ponce, con la devolución de los autos, á los efectos procedentes.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la "Gaceta oficial," lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—José S. Quiñones.—José O. Hernandez.—José M. Figueras.—Louis Sulzbacher.—Publicación.—Leída y publicada fué la anterior sentencia por el Sr. Presidente del Tribunal Supremo Don José S. Quiñones, celebrando audiencia pública dicho Tribunal en el día de hoy, de que como Secretario certifico, en

Puerto-Rico á 2 de Abril de 1901.—E. de J. López Gastambide, Secretario.

PROVIDENCIAS JUDICIALES.

Ldo. Don Juan R. Ramos y Velez, Juez Presidente del Tribunal de Distrito de San Juan.

Hago saber: que en los autos ejecutivos que sigue el Banco Territorial y Agrícola contra Don Isaac Morales en cobro de un préstamo hipotecario, se ha decretado por el Tribunal en providencia de veinte y tres de Abril último, se saquen á pública subasta por el término de veinte días los bienes embargados, consistentes en una finca rústica, sita en el barrio de Oedro-abajo, término de Naranjito, compuesta de trescientas treinta cuerdas, equivalentes á ciento veinte y nueve hectáreas, setenta áreas, treinta y dos centiáreas de terreno á cafetos, contiene una casa-habitación y tres ranchos, y linda al Norte con tierras de Don Lino Nieves y Don José Engracia Morales; al Sud con los de Don Braulio Morales y Don Justo Morales Rivera; al Este con el rio "Naranjito"; y al Oeste con tierras de Don Bernabé Berríos Rivera, Don Antonio Rivera y Doña Angela Matos Nieves.

La subasta se celebrará en la Audiencia de este Tribunal y en la del Juzgado municipal de Naranjito el día once del entrante Junio á las tres y cuarto de la tarde, sin suplir previamente la falta de títulos, aunque se hace constar que se encuentra inscrito en el Registro de la Propiedad del Distrito.

Dicha finca está valorada en quince mil pesos provinciales, equivalentes á nueve mil pesos oro americano, y no se admitirá postura que no cubra las dos terceras partes del avalúo; advirtiéndose que para tomar parte en la subasta hay que depositar previamente el diez por ciento de dicho avalúo.

San Juan Puerto-Rico, Mayo 22 de 1901.—Juan R. Ramos.—Ramón Falcón. 3-2

Hago saber: que en los autos ejecutivos que sigue el Banco Territorial y Agrícola contra Don Angel M. Berríos en cobro de un crédito hipotecario, se ha decretado por el Tribunal en providencia de veinte y tres de Abril último, se saquen á pública subasta por el término de veinte días los bienes embargados, consistentes en una finca rústica, sita en el barrio de Oedro-abajo, término de Naranjito, compuesta de ochenta y cuatro cuerdas, setenta y cinco centiáreas, equivalentes á treinta y tres hectáreas, once áreas, treinta y ocho centiáreas de terreno con plantas de café y dos casas de habitación; lindantes al Norte con terrenos de Don Manuel Oid Parada; al Oeste con los del mismo Sr. Berríos y Rivera; al Sud con tierras de Don Inocencio Morales y Francisco Rodriguez; y al Este con los de Don Jacinto Nieves.

La subasta se celebrará en la audiencia de este Tribunal y en la del Juzgado municipal de Naranjito el día diez del entrante Junio á las tres de la tarde sin suplir previamente la falta de títulos, aunque se hace constar que se encuentra inscrita en el Registro de la Propiedad del Distrito.

Dicha finca está valorada en tres mil ciento veinte pesos moneda provincial, equivalentes á mil ochocientos setenta y dos pesos oro americano, y no se admitirá postura que no cubra las dos terceras partes del avalúo; advirtiéndose que para tomar parte en la subasta hay que depositar previamente el diez por ciento de dicho avalúo.

San Juan Puerto-Rico, Mayo 23 de 1901.—Juan R. Ramos.—Ramón Falcón. 3-2

Ldo. Don Carlos Franco y Soto, Juez asociado del Tribunal de Justicia del Distrito de Ponce é instructor de los autos que se dirán.

Hago saber: que en los autos ejecutivos seguidos por Don Domingo Piazza y Pietri contra Don Tomás Olivari y Santoni y Doña Adela Santoni y Ortiz sobre cobro de diez mil ochocientos ochenta dólares de capital y mil dólares para costas y gastos, el Tribunal ha dispuesto por providencia de catorce del actual, se saquen á pública subasta por término de veinte días los bienes embargados en dichos autos para responder del crédito reclamado, consistentes en un predio que se segregó de la hacienda denominada "Hortensia", con cabida de doscientas cincuenta cuerdas, equivalentes á noventa y ocho hectáreas, veinte y cinco áreas y noventa y nueve centiáreas, radicado en el barrio de Rancheras, del término municipal de Yauco, con casa-habitación y otras construcciones; lindando al Norte con el camino real que divide la jurisdicción de Yauco de la de Maricao; al Sud con terrenos de Doña Sofia War Rhyn de Gran; al Este con aguas de la quebrada denominada "Blanco" y terrenos de la hacienda de Don Vicente Sumarola; y por el Oeste con terrenos de Don Pedro Camacho; hacienda de Don Pedro Olivari y terrenos de la hacienda "Luiza" de Doña Adela Santoni y Don Tomás Olivari, antes, hoy de Don Francisco Piazza, cuya finca ha sido apreciada en cuatro mil doscientos dólares, habiéndose señalado para el acto de la subasta el día diez y ocho de Junio próximo á las nueve de la mañana en la Sala Audiencia de este Tribunal; advirtiéndose que no se han suplido los títulos de propiedad; que no se admitirá postura que no cubra las dos terceras partes del avalúo que sirve de tipo para la subasta; y que los licitadores deberán consignar previamente en la mesa de Secretaría del Tribunal, cuando menos el diez por ciento de la cantidad que sirve de base para el remate, sin cuyo requisito no serán admitidos.